



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010044105 DEL 10/10/2014

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa”

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior.”*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de JAMBALÓ, del departamento del CAUCA, es de categoría 6 y se determinó que no fue prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo al 31 de diciembre de 2012, por lo que para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3° del Decreto 1639 de 2013.

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010010655, del 7 de abril de 2014, la Superintendencia de Servicios Públicos resolvió DESCERTIFICAR al municipio de JAMBALÓ, del departamento del CAUCA, por no haber cumplido los siguientes requisitos establecidos en el artículo 3° del decreto 1639 de 2012:

A) Reporte al SUI de la suscripción de los contratos en la zona urbana a que se refiere el artículo 99.8 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 11 del Decreto número 565 de 1996 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, o alguno de los siguientes documentos que soporten:

a) Giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
b) Giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP-PDA.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

- c) Certificación emitida por el prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en donde certifique el monto del giro de los recursos destinados al pago de los subsidios.
d) Reporte al FUT en la categoría de gastos de inversión el compromiso de subsidios.

B) Reporte al SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya. En caso de no poder acreditar el criterio de la forma descrita, podrá:

- a) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o,
b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar.

Que mediante el oficio No. 20144010213801, del 22 de abril de 2014, la SSPD, notificó por aviso al municipio de JAMBALÓ, sobre el contenido de la Resolución No. 20144010010655, del 7 de abril de 2014. Que dicha notificación fue entregada en la administración municipal, el día 30 de abril de 2014, según consta en el certificado de entrega expedido por la empresa de correos 472, tal como se anexa a continuación; por lo tanto, el acto administrativo quedo notificado el 2 de mayo de 2014, teniendo el alcalde municipal como término para recurrirlo hasta el 16 de mayo de 2014.

Certificación de entrega**Servicios Postales Nacionales S.A.****Certifica:**

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

472 CORREO CERTIFICADO NACIONAL		Fecha Preadmisión: 24/04/2014 13:28:41		RN169339445CO	
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. HIT 900.06217-9 DO 25 C 95 A 55		Centro Operativo: UAG CENTRO		MOTIVOS DE NO ENTREGA	
REMITENTE		NIT/CIT: 800250984		PRIMER INTENTO DE ENTREGA	
Nombre/Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		Teléfono: 110221		FECHA: 24/04/2014	
Dirección: CRA 18 No. 84 - 35		Código postal: 110221		HORA: 11:00	
Referencia:		O.S.: 1738219		SEGUNDO INTENTO DE ENTREGA	
Ciudad: BOGOTÁ D.C.		CÓDIGO OPERATIVO: 1111463		FECHA: 25/04/2014	
Departamento: BOGOTÁ D.C.		CÓDIGO OPERATIVO: 7013		HORA: 11:00	
DESTINATARIO		FIRMA IMPOSITOR		OBSERVACIONES DE DISTRIBUCIÓN:	
Nombre/Razón Social: ALCALDESA MUNICIPAL		Valor \$7.200		PESO (grs) 20,00	
Dirección: PALACIO MUNICIPAL		Peso Volumétrico (grs) 0,00		Valor Declarado \$0	
Ciudad: JAMBALÓ		Teléfono: 20144010213801		FECHA: 29-04-2014	
Departamento: CAUCA		Código postal:		HORA: 11:00	
OBSERVACIONES DE ADMISIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:		FIRMA IMPOSITOR		DIBO X 6.1	
Valor \$7.200		PESO (grs) 20,00		PESO Volumétrico (grs) 0,00	
Valor Declarado \$0		FIRMA IMPOSITOR		25603258	

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Que revisado el Sistema de Gestión Documental ORFEO de esta entidad, no se encontró recurso de reposición presentado en término, en contra de la decisión de descertificar al municipio de JAMBALÓ contenida en la Resolución No. SSPD 20144010010655, del 7 de abril de 2014.

Que el señor ÁLVARO BUSTAMANTE SANDOVAL, en su calidad de apoderado del municipio de JAMBALÓ, mediante oficio número SSPD 20145290407812, del 29 de julio de 2014, presentó ante este despacho una solicitud para que se produzca la revocatoria directa de la Resolución No. SSPD 20144010010655, del 7 de abril de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, basado en los argumentos que se señalan a continuación:

" (...) 9. Con fundamento en lo anterior, mediante la Resolución número SSPD-20144010010655 del 4 de abril de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, se decide descertificar (sic) al municipio (sic) de Jambaló Cauca, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

10. La Resolución antes mencionada, fue notificada mediante aviso del 22 de abril de 2014 el cual fue radicado en la Unidad de Archivo de la Alcaldía Municipal de Jambaló Cauca el día 2 de mayo de 2014.

11. A través de oficio del 4 de julio de 2014, emanado del secretario de Infraestructura del departamento del Cauca, se le informa al Alcalde Municipal de Jambaló Cauca, lo relacionado con el Acta de Empalme por Descertificación del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, e igualmente mediante oficio número 2014EE0053851 del director (sic) de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Vivienda, se le informa al gobernador del departamento del Cauca sobre los municipios (sic) Descertificados, oficio que fue radicado también en la Unidad de Archivo del Municipio de Jambaló Cauca, el día 15 de julio de 2014"

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO Y SUSTENTACIÓN (sic) DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA

Nuestra constitución política en su artículo 29 determina: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante Juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio... ()

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de su abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso"

Respecto al debido proceso existen prolijos y extensos pronunciamientos, tanto a nivel de doctrina como de jurisprudencia, especialmente de la Corte Constitucional.

En este orden de ideas tenemos que el debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra expresamente "para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas".

El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone: "Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el día dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen anterior."

Por lo expuesto en el artículo antes transcrito, es procedente formular la presente petición de revocatoria directa de conformidad con lo previsto por el artículo 93 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, el cual dispone:

"Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley;
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona"

De otra parte el artículo 94 del precitado Código consigna:

"Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial"

Igualmente el artículo 95 del Código en cita dice:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

"Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso".

En el caso sub examine es procedente solicitar la presente Revocatoria Directa; puesto que el municipio (sic) de Jambaló no interpuso el recurso en la vía gubernativa, que en éste caso particular y concreto era el de Reposición.

Señor Superintendente, para efectos de sustentar mis argumentos en los cuales sustentó la presente petición es importante tener en cuenta el contenido del artículo 5° del Decreto 1639 de 2013, el cual es del siguiente tenor literal: "Criterios adicionales para entidades territoriales prestadoras directas de categorías 4, 5 y 6. Para los procesos de certificación anual que se adelantarán respecto de las vigencias 2012, 2013 y 2014, los municipios del país de categorías 4, 5 y 6 que tuvieran la condición de prestadores directos de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, de acuerdo con los aspectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y los requisitos señalados en el artículo 10 del Decreto 1040 de 2012, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes criterios:

Así mismo es importante traer a colación el artículo 6°, del precitado Decreto 1639 el cual preceptúa: "Condición del municipio o distrito. Para efectos del procedimiento de certificación se tendrá en cuenta la condición de prestador directo o no de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo que ostente el municipio o distrito al 31 de diciembre de la vigencia a certificar, según la clasificación del Registro Único de Prestadores de Servicios- RUPS, registrado en el SUI.

Los municipios o distritos a los que les sea aplicada la medida correctiva de asunción temporal de competencia por parte del departamento o la Nación, establecida en el numeral 13.3 del Decreto 028 de 2008 o la norma que lo modifique, complementé o sustituya, no serán objeto del proceso de certificación reglamentado en el presente decreto."

De otra parte, señor Superintendente, se observa que el artículo 8o del pluricitado Decreto 1639 se refiere al procedimiento (sic) que debe seguir la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para efectos de expedir la certificación. Al respecto dicho normativo preceptúa: "Procedimiento para expedir la certificación. La SSPD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirán los protocolos para la revisión de la información y de los criterios que a cada uno de ellos corresponde verificar.

La SSPD aplicará las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo que se refiere a la actuación administrativa, notificaciones, pruebas y recursos.

En el acto administrativo que expida la SSPD se ordenará comunicar al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el contenido de la resolución, para efectos del cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1176 de 2007 y su publicación en la respectiva página web institucional.

Señor Superintendente, de conformidad con lo ordenado por el artículo 8o del precitado Decreto 1639, para efecto de expedir la certificación la Superintendencia necesariamente tenía que haberse ceñido al Procedimiento indicado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cual en el caso particular y concreto del Municipio de Jambaló Cauca, nunca ocurrió; puesto que el alcalde municipal (sic) tiene conocimiento de que se estaba adelantando un proceso de certificación, solo cuando se le cita para notificarle el Acto Administrativo mediante el cual se toma la decisión de descertificar al municipio (sic) o sea la Resolución número SSPD- 20144010010655 del 07/04/2014.

Señor Superintendente en nuestro criterio con la expedición de la Resolución número SSPD- 20144010010655 del 07/04/2014. "Por la cual se decide la certificación relacionada con la descertificación de los recursos del sistema de participaciones de agua potable y saneamiento básico SCP-APSB, correspondiente a la vigencia de 2012", se violó de manera flagrante el Debido Proceso Administrativo de que trata el artículo 29 de la Constitución Política por las siguientes razones.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

En primer lugar, tal como se consignó anteriormente la Constitución Política en su artículo 29 consagra que: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Igualmente el último inciso del artículo 2o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código".

Así mismo el artículo 3°, del precitado Estatuto Contencioso Administrativo establece. " Principios: Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. (...)"

En el caso sub judice, para expedir la Resolución objeto de la presente Revocatoria no se tuvo en cuenta, lo establecido en los normativos antes mencionados; no obstante que el mismo artículo 8o del Decreto 1639 lo está ordenando, es decir, que para efecto de tomar una decisión como la que se tomó o sea descertificar al municipio (sic) de Jambaló Cauca, necesariamente, se tenía que haber adelantado un procedimiento administrativo de acuerdo con lo regulado por la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el cual se respetara el Derecho Fundamental del Debido Proceso, a través de lo cual se tenía que haber necesariamente notificado la iniciación del respectivo procedimiento, para que desde ese momento hiciera uso del derecho de contradicción y defensa, lo cual reitero, no ocurrió.

Es de anotar que el Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, regula lo relacionado con el Procedimiento Administrativo General, consignando en el Capítulo I, las Reglas Generales y en el Capítulo III, lo concerniente con el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, procedimiento que no se aplicó en el caso que nos ocupa, a pesar de que el artículo 8o del Decreto 1639 de 2013, así lo ordena, con lo cual se tipifica indudablemente una clara violación al debido proceso administrativo, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

De otra parte señor Superintendente, se observa de que al momento de aplicar la medida contra el Municipio de Jambaló Cauca, no se tuvo en cuenta lo dispuesto por el artículo 6° del mismo Decreto 1639 de 2013, el cual, tal como se consignó anteriormente, dice en su inciso la Condición del municipio o distrito. Para efectos del procedimiento de certificación se tendrá en cuenta la condición de prestador directo o no de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo que ostente el municipio o distrito al 31 de diciembre de la vigencia a certificar, según la clasificación del Registro Único de Prestadores de Servicios- RUPS, registrado en el SUI- (...)

En el caso específico del municipio (sic) de Jambaló Cauca, se observa que este ente territorial, no era prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo a 31 de diciembre de 2012 como tampoco actualmente, pues mediante el Contrato del primero (I°) de noviembre de 2012, celebrado con la Administración Pública Cooperativa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio (sic) de Jambaló Cauca -APC-, la Gestión, para la Operación, Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio (sic) de Jambaló Cauca, es responsabilidad de dicha APC.

Es de anotar que mediante Contrato adicional del número 001 del 30 de noviembre de 2010, el Contrato principal antes mencionado fue adicionado en el plazo, acordando dicho plazo en seis (6) años.

Por lo anterior en mi calidad de apoderado del municipio (sic) no comparto lo afirmado en el primer párrafo de la página tres (3) de la Resolución impugnada que dice:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

"Con fundamento en la información remitida a ésta entidad por el MVCT, el ente territorial no acreditó el reporte en el FUT en la categoría de inversión el pago por concepto de subsidios vigencia 2012.", pues de conformidad con certificación expedida por el secretario (sic) de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de Jambaló Cauca, con fecha 17 de julio de 2014, el municipio (sic) de Jambaló Cauca, le giró a la APC, los recursos destinados para los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, correspondientes a la vigencia fiscal de 2012, recursos que fueron girados a la cuenta bancaria número 421322010309 denominada Administración Pública Cooperativa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio (sic) de Jambaló Cauca, del Banco Agrario de Colombia y además según cuadro que se anexa como prueba a la presente petición, el municipio (sic) de Jambaló hizo el reporte de dicha inversión al FUT.

III. PETICIÓN (sic)

Con fundamento en lo expuesto le formulo al señor Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superservicios, con todo respeto la siguiente petición.

1. - Revocar directamente la Resolución número SSPD- 20144010010655 del 07/042014 expedida contra el Municipio de Jambaló Cauca por su Despacho "Por la cual se decide la certificación relacionada con la descertificación de los recursos del sistema de participaciones de agua potable y saneamiento básico SGP-APSB, correspondiente a la vigencia de 2012"

Lo anterior por ser manifestamente contraria al debido proceso de acuerdo con lo previsto por el artículo 29 de la Constitución Política y el numeral primero (lo.) del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y además porque el municipio (sic) de Jambaló Cauca cumplió con el giro de los recursos destinados para subsidios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la vigencia del año 2012 y además se hizo el reporte de dichos gastos de inversión al FUT, tal como se demuestra con el cuadro anexo.

2. - Como consecuencia de lo anterior, Certificar al municipio (sic) de Jambaló en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico."

2. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DIRECTA

La figura jurídica de la revocatoria directa, consiste en la potestad legal atribuida a la administración en cabeza del funcionario que profirió el acto o en su defecto a su superior jerárquico, de oficio o a petición de parte, para que suprima de la vida jurídica, una decisión administrativa contraria a la Constitución Nacional o a la ley, al interés público o social, o cuando cause un agravio injustificado a una persona, causales previstas en el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"(C.P.A.C.A.).

"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

Así mismo, el artículo 95 ibídem, expresa: **"OPORTUNIDAD.** La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda".

En este orden de ideas, es claro que la figura jurídica de la de la revocación directa de los actos administrativos instituida en los artículos 93 y s.s. del C.P.A.C.A., consiste en la potestad legal atribuida a la administración en cabeza del funcionario que profirió el acto, o en su defecto a su superior jerárquico, de oficio o a petición de parte, para que suprima de la vida jurídica, una decisión administrativa contraria a la Constitución Política o a la ley, al interés público o social, o cuando cause un agravio injustificado a una persona; de manera que la revocatoria es un mecanismo adicional de control de legalidad tendiente a excluir del ordenamiento aquellas decisiones administrativas que adolezcan de alguna de las causales antes reseñadas.

En el caso en estudio, ni el alcalde de JAMBALÓ ni su apoderado especial interpusieron recurso de reposición en término, por lo cual es procedente entrar a conocer de la Revocatoria Directa contra la Resolución No. SSPD 20144010010655, del 7 de abril de 2014.

3. ANÁLISIS DE FONDO

Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar la causal de revocatoria invocada en la solicitud presentada por el Dr. Bustamante, lo cual efectuará de la siguiente manera:

3.1. Manifiesta Inconstitucionalidad o ilegalidad.

Procede éste despacho a estudiar la causal invocada por el apoderado del municipio de JAMBALÓ, para obtener la revocatoria de la Resolución No. SSPD 20144010010655, relacionada con que la misma es opuesta a la Constitución Política o a la ley, argumentado que la actuación administrativa adelantada por esta superintendencia, no atendió las normas del C.P.A.C.A., puesto que no se notificó al alcalde del inicio de la actuación administrativa y no se observó el procedimiento administrativo sancionatorio, lo que conllevó a la violación del debido proceso. Además, se afirmó que el municipio cumplió con el pago de los recursos de subsidios, para la vigencia 2012.

Debe resaltarse que esta causal hace referencia con la ilegalidad del acto; es decir, que éste vulnere de manera ostensible y flagrante lo ordenado por la Constitución o la ley. Por consiguiente, de concretarse tal condición, la administración debe dejarlo sin efecto mediante la revocatoria, sin embargo, no puede declarar su inconstitucionalidad o ilegalidad, toda vez que tal competencia radica en la jurisdicción (en lo jueces).

De cara a tales argumentos, esta entidad inicia señalando que el artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; ahora bien, esta garantía procesal reconocida a la persona (natural o jurídica, pública o privada), tiene como finalidad que no pueda resultar sancionada o perjudicada por decisiones de la autoridad que desconozcan las oportunidades establecidas por la ley para intervenir y defenderse.

Ahora bien, teniendo como pilar de las actuaciones administrativas, como la que nos ocupa, el respeto por el debido proceso, haremos referencia a lo que se ha denominado debido proceso administrativo; al respecto, la Honorable Corte Constitucional al pronunciarse frente a este tema, señaló: *"Así, a partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende como un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que gobiernan la función pública y que enuncia el canon 209 superior. Estos principios son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad"*.¹

Así mismo, el máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, en sentencia T-2.897.231 de 2011, señaló que son garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las siguientes: (a) el derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia, (g) a ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.

Con fundamento en el señalado y revisado el procedimiento llevado a cabo por esta superintendencia, el cual terminó con la descertificación del municipio de JAMBALÓ, se estableció que el proceso adelantado en el marco de la certificación para la administración de los recursos del SGP-APSB, para la vigencia 2012, cumplió a cabalidad con los presupuestos exigidos por la norma constitucional y jurisprudencia, acerca de las garantías que aseguran el debido proceso, a saber:

Esta entidad con oficio SSPD 20134010143571, del 27 de marzo de 2013, le informó al alcalde de JAMBALÓ, las obligaciones a cargo de la administración municipal frente al cargue de información al SUI para los procesos de certificación en coberturas mínimas y SGP – APSB (vigencia 2012), además de hacerle referencia a los requerimientos realizados por la PGN en las Directivas 015 de 2005 y 05 de 2008. Es decir, al ente territorial se le comunicó oportunamente del procedimiento y requisitos para obtener la certificación en mención.

Así mismo, el auto de apertura del proceso SGP-APSB, vigencia 2012, No. SSPD 20134010011046, del 20 de septiembre de 2013, fue comunicado al municipio con el oficio No. SSPD 20134010610981, y remitido por correo certificado el 27 de septiembre de 2013. Es necesario aclararle al recurrente que el

¹ Corte Constitucional. Sentencia C-610 del 1 de agosto 2012. MP Luis Ernesto Vargas Silva

Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

Auto en mención no fue notificado al alcalde de JAMBALÓ sólo fue comunicado a él, puesto que dicho acto administrativo no contiene una decisión de esta superintendencia respecto a la certificación o no del municipio, es decir, es un acto de trámite, por ello es deber de ésta entidad comunicar dicho acto al interesado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 67 del C.P.A.C.A., no procede la notificación de la misma.

Ahora bien, una vez expedida la Resolución de descertificación No. SSPD 20144010010655, del 7 de abril de 2014, este acto administrativo fue debidamente motivado y notificado a los interesados de conformidad con los presupuestos de Ley, para lo cual se le brindó al ente territorial la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y por consiguiente, de impugnar la decisión, al advertirle que contra la decisión adoptada procedía el recurso de reposición.

Igualmente debe señalarse que esta superintendencia es la autoridad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, de conformidad con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007.

Así pues, resulta claro que la Resolución No. SSPD 20144010010655, no es un acto violatorio del debido proceso, y por el contrario, constituye una muestra evidente de su desarrollo y de la aplicación de los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que rigen las actuaciones administrativas.

Respecto a la afirmación de Dr. Bustamante relacionada con la no aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio para expedir la decisión de certificar o no al municipio de JAMBALÓ, es preciso señalar que el proceso de certificación es una actuación que se adelanta en estricto cumplimiento de las disposiciones legales teniendo a cada municipio de manera independiente y para cada ente territorial se analizó el cumplimiento de requisitos para efectos de obtener la certificación de la vigencia 2012.

Dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria, por ello, las normas procesales que se deben aplicar al presente proceso de conformidad con el artículo 8° del Decreto 1639 de 2013, son las consagradas en el procedimiento administrativo general y no en el sancionatorio como en forma equivocada se pretende hacer ver.

Es necesario aclarar que la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, confiere a las autoridades del sector de servicios públicos la facultad de producir, unilateralmente, actos administrativos particulares y generales; por eso consagra reglas especiales sobre procedimientos administrativos, las cuales están previstas en los artículos 106, 115 y se relacionan con los actos de carácter particular y concreto que las autoridades pueden producir, como lo son las sanciones.

A su vez, el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece que la SSPD tiene las funciones de vigilancia, control y sanción de las empresas de servicios públicos domiciliarios; además, el artículo 81 de la misma consagra las sanciones que puede imponer a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Así las cosas, y debido a que la descertificación de los municipios no se encuentra señalada como una sanción de las que pueda imponer esta superintendencia en virtud del ejercicio de la facultad sancionatoria, se aplican las normas del proceso administrativo general y no las del proceso administrativo sancionatorio, se reitera.

Como corolario de lo anterior, esta entidad no le formuló cargos, ni le dio la oportunidad de rendir descargos, por cuanto al haberse regido el proceso de certificación SGP-APSB, vigencia 2012, por el proceso administrativo y no sancionatorio, tales etapas no se tenían que surtir dentro de esta actuación.

Adicionalmente, señala el recurrente que el municipio cumplió con el pago de los subsidios al prestador y realizó el reporte de dicha información en el FUT por ello cumplió con el requisito relacionado con el pago de los recursos de subsidios al prestador, correspondiente al aspecto relacionado con el balance entre los subsidios y las contribuciones, al respecto se reitera que el municipio de JAMBALÓ incumplió dos requisitos, tal como se señaló en el numeral 1 de éste acto administrativo, y no uno sólo como lo señala el recurrente, sin embargo nos pronunciaremos de éstos criterios así:

- **FUNCIONAMIENTO DEL FSRI:** Aunque el recurrente no se pronunció sobre el cumplimiento de éste criterio, esta superintendencia explicará por que el municipio no lo acreditó, de acuerdo a lo que se señaló en la Resolución objeto de la solicitud de revocatoria. El municipio debía acreditar el cumplimiento de alguno de los siguientes criterios:

a) La suscripción de los contratos en la zona urbana para el giro de los subsidios: el municipio no reportó al SUI los contratos o convenios suscritos para el pago de los subsidios, tal como se evidencia a continuación:


Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

Servicio	Topico	Año	Periodicidad	Formato	Estado
Acueducto	Información Administrativa y Financiera	2012	Anual	9. Convenios de Giro de Recursos al FSRI - Acueducto	PENDIENTE
Alcantarillado	Información Administrativa y Financiera	2012	Anual	Convenios de Giro de Recursos al FSRI - Alcantarillado	PENDIENTE
Aseo	Información Administrativa y Financiera	2012	Anual	Convenios de Giro de Recursos al FSRI - Aseo	PENDIENTE

b) Giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP-PDA, o reporte al FUT en la categoría de gastos de inversión el compromiso de subsidios: Con el oficio No. SSPD 20135290515162, del 3 de octubre de 2013, el MVCT señaló que el municipio de JAMBALÓ no cumplió, tal como se señala a continuación:

Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso		
a) Giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	b) Giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP-PDA	d) Reporte al FUT en la categoría de gastos de inversión el compromiso de subsidios
No Acreditada	No Acreditada	No Acreditada

c) Certificación emitida por el prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en donde certifique el monto del giro de los recursos destinados al pago de los subsidios: el municipio reportó los siguientes documentos:




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMBALÓ
DESPACHO DEL ALCALDE
 Nit. 891.601.047-9 - TL: 8701927
 Cra 3 A Nro 5-11 Edificio CAM parque principal
 alcaldia@jambalo-cauca.gov.co

LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA

CERTIFICA:

Que revisada la información que reposa en los libros de presupuesto del Municipio de Jambaló Cauca, para la vigencia 2012 se verificó que se trató de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ CAUCA de este ente territorial, recursos provenientes del Fondo de Solidaridad y redistribución de Ingresos FSRI, los cuales se giraron a la cuenta bancaria No 421322010309 Denominada Administración Pública Cooperativa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Jambaló cauca, del Banco Agrario de Colombia, como se detalla a continuación.



APC JAMBALÓ
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE ACUEDUCTO
 ALCANTARILLADO Y ASEO DE JAMBALÓ
 Nit. 900381942-1
 E-mail: apcjambalo@hclmail.com

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE JAMBALÓ CAUCA

CERTIFICA:

Que revisada la información que existe en el archivo de la APC del Municipio de Jambaló Cauca, para la vigencia 2013 se verificó que La Alcaldía Municipal de Jambaló Cauca se encuentra a paz y salvo con el traslado de los subsidios para los usuarios de estratos 1, 2 y 3., como se detalla a continuación.

Tal como se puede observar, la certificación del tesorero municipal y la certificación de la APS de Jambaló, no cumplen con el requisito señalado, el primer documento debido a que no fue expedido por el prestador y el segundo, porque señala información correspondiente a la vigencia 2013, y no a la del 2012, vigencia a la que corresponde el proceso de certificación objeto de estudio. Por lo anterior, éste criterio no fue cumplido por el municipio.

Sobre éste punto es necesario aclarar que el artículo 3° del Decreto 1639 de 2013, corresponde a una norma procesal, que señala la forma en que cada municipio y distrito debe acreditar el cumplimiento de los criterios señalados para obtener la certificación; siendo deber de ésta superintendencia verificar si la información reportada por la entidad territorial corresponde a la señalada en el decreto en mención, actúa de otra manera sería trasgredir la misma norma.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

Pues bien, partiendo de que la anterior es una norma procesal y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, según el cual, *"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley"*.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado así²: *"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas."*, además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

"(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."

Adicionalmente, según lo señala el artículo 228 de la Constitución Política, el principio de la prevalencia del derecho sustancial constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico, el cual no es excluyente de las normas procesales ni preferente de las normas sustanciales. Sobre este tema la Corte se pronunció³ y aclaró lo siguiente:

"(...) Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas (...)"

Dado que la norma es clara en señalarle al alcalde el deber de asumir unas cargas procesales, que, si no cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el ordenamiento jurídico prevé para tales casos, esto es, la prevista en el artículo 5º de la Ley 1176 de 2007, reglamentado por el Decreto 1040 de 2012, según la cual, si la entidad territorial que es sujeto del proceso de certificación, no hubiera reportado la información señalada en el Decreto 1639 de 2013, debe entenderse que pierde la administración de los recursos del SGP-APSB y la competencia para asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

- **BALANCE ENTRE LOS SUBSIDIOS Y LAS CONTRIBUCIONES:** El municipio no cumplió con alguno de los siguientes criterios:

a) Reporte al SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya. El municipio reportó en el SUI el acuerdo No. 0003, del 29 de febrero de 2012, pero los porcentajes mínimos de contribuciones fijados, no atienden lo señalado en la Ley 1450 de 2011:

ESTRATO	ACUEDUCTO CARGO FIJO Y CONSUMO	ALCANTARILLADO O CARGO FIJO Y CONSUMO	ASEO CARGO FIJO Y CONSUMO
5	20%	20%	20%
6	20%	20%	20%
Industrial y comercial	20%	20%	20%

b) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar. El municipio no reportó la información solicitada en el SUI:

² Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería

³ Corte Constitucional. Sentencia C -1512 del 8 de noviembre 2000. MP Alvaro Tafur Galvis

Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

Servicio	Año	Periodicidad	Formato	Aplicación	Estado
Acueducto	2012	Anual	FORMATO BALANCE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES (ALCALDES)	Cargue Masivo	PENDIENTE

c) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar. Con el oficio No. SSPD 20135290515162, del 3 de octubre de 2013, el MVCT señaló que el municipio de JAMBALÓ no cumplió, tal como se señala a continuación:

Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo
b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar
No Acredita

Ahora bien, dentro de los documentos que allega como prueba del reporte de dicha información en el FUT se encontró una relación de la información reportada en la categoría de gastos de información, pero la misma corresponde sólo a los recursos de subsidios PRESUPUESTADOS por el municipio, con lo cual no se evidencia el pago de los mismos, tal como se puede observar a continuación:

21440354 - JAMBALÓ MUNICIPIO 01-10-2013 al 31-12-2013 FUT GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS DE INVERSIÓN							
CCODIGO	NOMBRE	FUENTES DE FINANCIACION	PRESUPUESTO SOCIAL	PRESUPUESTO DEFICITARIO	COMPROBOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAG
A	TOTAL INVERSIÓN		723400.000	1123450.000	863781.000	813000.000	7620
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VRS)		714850.000	1080400.000	778572.000	612700.000	850
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO		501811.000	707844.000	585782.000	448620.000	440
A.3.10.12	ACUEDUCTO-FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS		0.000	0.000	0.000	0.000	
A.3.10.12	ACUEDUCTO-FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS	OTROS APORTES O TRANSFERENCIAS NACIONALES	0.000	0.000	0.000	0.000	
A.3.10.13	ACUEDUCTO- SUBSIDIOS		35378.000	45378.000	19000.000	19000.000	18
A.3.10.13	ACUEDUCTO- SUBSIDIOS	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS, VENTA DE ACTIVOS, DONACIONES, RECURSOS DE BALANCE- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Y/O INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA)	35378.000	45378.000	19000.000	19000.000	18

Así las cosas, resulta claro que los argumentos señalados por el Dr. Bustamante, no se adecuan a lo establecido en la causal primera del artículo 69 del C.P.A.C.A., puesto que el acto administrativo del que se reclama su revocatoria, no violó la Constitución y/o la Ley, toda vez que esta entidad cumplió a cabalidad con la normatividad que reglamenta el proceso de certificación para la administración de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2012 y sus normas de procedimiento, siendo procedente no acceder a la solicitud de revocatoria presentada en este asunto por el señor Álvaro Bustamante Sandoval.

Por lo expuesto este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- NO REVOCAR la Resolución No. SSPD 20144010010655, del 7 de abril de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al apoderado del municipio de JAMBALÓ, del departamento del CAUCA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y

Continuación de la resolución por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del C.P.A.C.A.

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información ✓
Visto Bueno: Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo ✓
Expediente: 20094011980980426A